

CIENCIA POLITICA Y DEMOCRACIA

Oscar Oszlak

En 1982, tuvo lugar en Río de Janeiro el XII Congreso Mundial de Ciencia Política. Brasil se hallaba por entonces, al igual que la Argentina, sometido a un duro régimen autoritario que coartaba los derechos ciudadanos y restringía la institucionalidad política.

Sin embargo, a diferencia de Argentina, Brasil había conseguido algunos avances importantes en materia de expresión política abierta, entre los cuales la propia realización de un Congreso Mundial sobre esta disciplina constituía un hito significativo.

Este artículo, publicado a mi regreso de Río y poco después de la derrota de Malvinas, fue mi primer test personal sobre la posibilidad de construir un nuevo espacio de reflexión en un contexto político donde el régimen militar gobernante comenzaba a manifestar signos de deterioro y la cuestión democrática empezaba a instalarse en la agenda pública. También fue mi bautismo como colaborador periodístico en notas de opinión.

El 9 de agosto de 1982, en el suntuoso auditorio del Hotel Nacional de Río de Janeiro, el presidente Joao Figueiredo declaró inaugurado el XII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA). Más de 1500 estudiosos de esta disciplina se reunieron en Río para debatir, durante una semana, 900 trabajos que -desde los ángulos más diversos- intentaban dar respuesta al interrogante central del congreso: cómo lograr en los años 80 la consolidación de las sociedades frente a sus respectivos Estados; cómo conseguir que esas sociedades, por sobre diferencias regionales o de regímenes políticos, sean capaces de conjurar las falacias del poder arrogante y de hallar nuevos medios de convertir a los aparatos estatales en servidores de la sociedad civil.

El interrogante, en definitiva, planteaba la cuestión de la democracia y problematizaba el tema de los procesos conducentes a su implantación y consolidación, frente al crecimiento a veces omnímodo del poder estatal y la consecuente supresión sistemática de espacios sociales en los que la comunidad, a través de sus organizaciones, puedan elaborar, expresar o participar en la gestación de las políticas que afectan su condición o destino.

La presencia presidencial y de altas autoridades del gobierno brasileño en el acto de inauguración del congreso, constituyó un hecho político altamente significativo, no sólo por su contenido simbólico sino también por las expresiones vertidas por el presidente en su mensaje a los congresistas. Tanto en esa oportunidad como en visitas efectuadas por autoridades de la IPSA a altos funcionarios estatales, la palabra oficial destacó la importancia de la ciencia política, del debate serio y riguroso, abierto y pluralista, como herramienta insustituible de la gestión estatal. Figueiredo instó a los participantes a profundizar los análisis y a extremar los esfuerzos en la búsqueda de interpretaciones y prescripciones, científicamente fundadas, que permitan la consolidación de instituciones democráticas y el diseño de políticas para una sociedad más justa e igualitaria.

Naturalmente, el mensaje se inscribía -y debía ser leído- desde la perspectiva del complejo juego preeleccionario que vive en estos momentos Brasil. Pero más allá de las motivaciones retóricas o proselitistas que podían atribuirsele, es preciso reflexionar sobre el significado más profundo de este acontecimiento político. Como argentino y politólogo, observador y participante de este evento, el discurso de Figueiredo merece otras consideraciones. En un país gobernado por un régimen autoritario, en el que el proceso de democratización de la vida política ha avanzado sostenida aunque gradualmente, el titular del Poder Ejecutivo no solo legitimaba con su presencia y su palabra el fortalecimiento de la sociedad civil como condición necesaria de la democracia, sino que además reconocía el papel crucial que le cabe a la comunidad intelectual en el debate sobre las fórmulas y los caminos que pueden conducir a ese resultado. La ciencia política -y más genéricamente, las ciencias sociales- aparecían así como un ámbito natural, un espacio legítimo, una instancia insoslayable, para una reflexión crítica y constructiva en torno a los obstáculos y a las opciones que plantea la democratización de la vida política.

La tentación de efectuar comparaciones, de imaginar al Teatro Municipal San Martín como escenario de una convocatoria semejante, como recinto en el que resonaran, palabras más, palabras menos, mensajes como el del Presidente Figueiredo, resulta irresistible. En las actuales circunstancias políticas de nuestro país, no sería totalmente fantástico imaginar al Presidente Bignone expresar conceptos similares. El problema es: ¿cuál sería la comunidad académica local destinataria de sus palabras?

En Río de Janeiro, la invitación al presidente fue cursada por el Dr. Cândido Mendes, prestigioso cientista político y rector del Conjunto Universitario que lleva su nombre y en el que se desarrolló el Congreso. Pero no menos de 20 ó 30 colegas e instituciones podían haberle disputado este honor. Brasil cuenta con decenas de facultades, institutos y programas universitarios de grado y posgrado en ciencia política, administración pública y disciplinas afines, así como con innumerables centros de investigación, oficiales y privados, en los que se forman y trabajan miles de profesionales. Los organismos estatales incorporan regularmente en sus planteles a graduados de estas disciplinas, los que cumplen un rol preponderante en la formulación e implementación de políticas públicas. La periódica realización de congresos y seminarios, en los que se reúnen investigadores, técnicos estatales y profesores universitarios, proporciona un ámbito fecundo de actualización, intercambio de experiencias y avance del conocimiento. La comparación es válida: ¿cuál sería en Argentina la contraparte académica del imaginario discurso presidencial? ¿De un discurso que invitara a los estudiosos de la política a una reflexión rigurosa sobre las cuestiones sociales que componen la agenda, el temario inevitable, de todo proyecto democrático?

Hasta su virtual colapso en 1966, la incipiente actividad de investigación en ciencias sociales se desarrolló en nuestro país principalmente en la Universidad de Buenos Aires. A partir de entonces, un puñado de centros independientes -surgidos en su mayoría durante la década del setenta- se constituyeron en el ámbito casi exclusivo de la labor académica en estas disciplinas. Sin embargo, su reducido número, la falta de apoyo oficial, la casi total desvinculación de las universidades y la censura y autocensura impuestas a toda forma de expresión crítica sobre el orden establecido en la sociedad argentina, limitaron seriamente la viabilidad y posibilidades de trascendencia de estas instituciones. Paradójicamente, aunque ello es también advertible en otras esferas del quehacer intelectual argentino, estos centros, ignorados en su propio país, adquirieron gran prestigio en el exterior, donde sus investigadores y sus publicaciones son reconocidos por sus aportes científicos y técnicos.

La política universitaria oficial desestimuló sistemáticamente la actividad en ciencias sociales. Cuesta creer que la Universidad de Buenos Aires no cuente con una licenciatura en ciencias políticas, administración pública o disciplinas afines. México,

Venezuela, Perú, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Colombia -sólo para citar de memoria los países que recuerdo- poseen carreras de este tipo en varias de sus universidades nacionales. Han organizado además programas de posgrado y sus institutos de investigación producen regularmente revistas y publicaciones científicas de vasta circulación dentro y fuera de sus territorios.

En la Universidad de Buenos Aires sobrevive -como un nicho académico sin lugar orgánico en las facultades existentes- una carrera de sociología que es un pálido reflejo de lo que fue alguna vez, en épocas del desaparecido Gino Germani, un centro de excelencia en el que se formaron gran parte de los escasos profesionales que aún encuentran en la actividad un medio de vida. En algunas universidades privadas persisten, con variada fortuna, algunos programas en sociología y ciencia política. Otros, menos afortunados, como la carrera en Administración Pública de la Universidad del Salvador o la carrera de Sociología en la Universidad de Belgrano, debieron cerrarse por falta de estímulos, especialmente por la escasa absorción del mercado de trabajo.

Las razones de esta actitud oficial francamente hostil a las ciencias sociales son fácilmente discernibles. En la Argentina, la ciencia política y la sociología han sido estigmatizadas como disciplinas sospechosas, en las que anida la prédica ideológica que desata la subversión. Las "ciencias sociales" legítimamente aceptadas han sido las practicadas en las facultades de derecho (y ciencias sociales), donde lo político es tratado como ciencia del bien común, o como conjunto de prácticas e instituciones incontaminadas por mezquinos intereses sectoriales o manifestaciones de conflicto social. La existencia de una Academia de Ciencias Políticas y *Morales*, integrada casi exclusivamente por juristas y militares retirados, constituye un anacronismo superado aun en países que marchan muy a la zaga en otros aspectos del desarrollo institucional, lo que nos exime de mayores abundamientos.

En esta incierta y crítica hora actual, es preciso despojarse de estos anacronismos y prejuicios. La posibilidad de construcción de la democracia depende centralmente de la capacidad de nuestros dirigentes, intelectuales e instituciones de imaginar los ejes ordenadores de un modelo de sociedad diferente, más allá de la compleja, opaca y conflictiva coyuntura. Los científicos sociales deben ser protagonistas de esta empresa. Son muchas las preguntas que aguardan respuesta, pero son muchas también las que ni siquiera se formulan con la seriedad e imperiosidad que las circunstancias exigen. La experiencia histórica registra demasiados fracasos en la restauración de la vida democrática como para exponernos a la improvisación y a nuevas frustraciones. La retórica y las buenas intenciones no bastan.

Ni los partidos políticos ni los organismos gubernamentales disponen de los cuadros técnicos y científicos dedicados a reflexionar, sistemáticamente, acerca de los innumerables problemas que compondrán la agenda de un futuro régimen democrático. ¿Qué significado tendrá, en términos operativos, el necesario redimensionamiento del Estado? ¿Cómo se restablecerán los puentes entre la sociedad civil y el Estado, de manera de fortalecer e institucionalizar definitivamente los mecanismos de representación política? ¿Cuál deberá ser, a partir de los antecedentes históricos nacionales y comparados, el lugar institucional de las fuerzas armadas en un futuro esquema de poder? ¿De qué manera deberán adecuarse las instituciones culturales y educativas, para hacerlas compatibles con nuevas pautas democráticas de organización social?

Estos interrogantes -y muchos otros que podrían formularse- abren un abanico de cuestiones que, además de su obvio contenido político, contienen inevitables ingredientes técnicos y científicos. Los politólogos -y los científicos sociales en general- no pueden estar marginados del proceso de resolución de estas cuestiones. Como crítico

sostén intelectual de una sociedad democrática, debe reconocerse a las ciencias sociales un espacio legítimo en esta empresa común. Cabe al estado un decidido cambio de actitud, que cree el interlocutor académico de la gestión gubernamental. La ciencia y la política, la verdad y el poder, son componentes igualmente legítimos de una sociedad democrática.